

No hay peor ciego

María José Abud



La falta de confianza en la clase política se debe, en parte, al desacople de las agendas que impulsan las autoridades con las dificultades que enfrentan las personas. Ejemplo de esto son las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, desconociendo la crisis de empleo y tildando de “eslogan” el diagnóstico laboral en que ha insistido David Bravo sobre la base de los datos del INE. Todo esto en un escenario en que 880 mil personas buscan trabajo sin éxito y 2,5 millones trabajan de manera informal.

Si bien en los últimos meses ha habido una leve mejora del desempleo, aún faltan por recuperar más de 200 mil empleos perdidos en la pandemia. La ministra celebra que desde el inicio del gobierno se han creado 550 mil empleos, cálculo bastante discutible, ya que al comparar el último dato del INE con el mismo trimestre móvil de 2022 hay un aumento de alrededor de 400 mil ocupaciones y el sector que más crece es el empleo público, con

149 mil nuevos puestos de trabajo.

Es urgente contar con un diagnóstico común entre técnicos y políticos ante datos objetivos. No sólo hay un desconocimiento de esta crisis por parte del Ejecutivo, sino que el tipo de medidas que se han priorizado en materia laboral va justamente en el sentido opuesto a reducir los costos del trabajo formal.

La evidencia es clara en que acciones como el importante ajuste del salario mínimo a 500 mil pesos, o la implementación de las 40 horas, pueden afectar negativamente el empleo. Ante estas medidas, son los trabajadores de menores ingresos los que arriesgan caer en el desempleo

o bien transitar desde la formalidad a la informalidad. De acuerdo con un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago, para dos de cada tres empresas la reducción de jornada implica mayores costos laborales.

¿Qué sería lo esperable? Dejar de ne-

gar la realidad y entender que la informalidad es un desafío estructural que requiere de una agenda urgente. Para esto, hay varios insumos disponibles, como el entregado a la ministra en abril de este año por la CPC, la AAFP y la Asech, que incluye 15 propuestas. Entre las medidas urgentes debiera ser prioridad la postergada reforma de sala cuna,

principal desincentivo para contratar a las mujeres. También urge la reformulación de herramientas como el Subsidio al Empleo Joven o el Bono al Trabajo de la Mujer, que han demostrado que no cumplen con el objetivo esperado.

Abordar la informalidad es una responsabilidad ineludible para

el progreso de 2,5 millones de trabajadores y sus familias que hoy están en esa condición. Pero también porque para una reforma de pensiones sostenible en el tiempo, es imposible continuar con un tercio de los ocupados trabajando informalmente.

“Para una reforma de pensiones sostenible en el tiempo, es imposible continuar con un tercio de los ocupados trabajando informalmente”.